



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

D. ALFONSO RAMOS DE MOLINS SÁINZ DE BARANDA, Secretario del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en uso de las competencias que le otorga el artículo 40 del Reglamento de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, aprobado por Real Decreto 1994/1996, de 6 de septiembre,

CERTIFICA:

Que en la Sesión 43/04 del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones celebrada el día 2 de diciembre de 2004, se ha adoptado el siguiente

ACUERDO

Por el que se aprueba la:

CONTESTACIÓN A LA CONSULTA PLANTEADA POR TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U SOBRE DETERMINADAS CUESTIONES RELATIVAS A LA APLICACIÓN DE LA CIRCULAR 1/2004, DE 27 DE MAYO, DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES, POR LA QUE SE INTRODUCE EL CONSENTIMIENTO VERBAL CON VERIFICACIÓN POR TERCERO EN LAS TRAMITACIONES DE PRESELECCIÓN DE OPERADOR.

I.- ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA CONSULTA.

Con fecha 11 de junio de 2004, ha tenido entrada en el Registro de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones escrito de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. (en adelante, TESAU), en el que, básicamente, expone lo siguiente:

TESAU comienza su escrito transcribiendo el apartado Tercero de la Circular 1/2004, de 27 de mayo, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por la que introduce el consentimiento verbal con verificación por tercero en las tramitaciones de preselección de operador (en adelante, Circular 1/2004), en el que se regulan los requisitos que debe cumplir la entidad verificadora. En opinión de TESAU, *“la mera exigencia del cumplimiento de estos requisitos a la entidad verificadora resulta insuficiente, pues en la Circular no se aclaran cuestiones especialmente relevantes en relación con las entidades verificadoras lo que dificulta la aplicación de las misma en el momento de su entrada en vigor.”*



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

A continuación, TESAU enumera las dudas que le genera la aplicación de la Circular 1/2004, en el siguiente sentido:

- Según TESAU, en la Circular 1/2004 no se indica la forma de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos a las entidades de verificación, *“ni ante qué organismo se debe acreditar dicho cumplimiento”*. En opinión de TESAU, *“debería existir un organismo que ejerza el control sobre las citadas entidades de verificación, y que al menos mantenga un **Registro Público** de entidades en el que éstas se identifiquen con los datos correspondientes acreditativos de su actividad.”*

Asimismo, TESAU expone que *“con independencia del registro citado, el **organismo que se declare competente** debería realizar actividades de control sobre las entidades de verificación.”*. No obstante, *“se desconoce el organismo responsable de ejercer dicha función de control sobre las entidades de verificación, por lo que no puede acreditarse que estas cumplan”*.

En opinión de TESAU, *“el organismo que finalmente ejerza este control deberá determinar el **régimen de responsabilidades** que debe ser exigido a las entidades de verificación”*.

- Por otro lado, TESAU expone que *“entre los operadores que opten por este sistema (el establecido en la Circular 1/2004) y la/s entidad/es de verificación deberán mediar unas **relaciones contractuales** que asimismo deberían estar sujetas a supervisión, toda vez que el resultado final es la acreditación del consentimiento verbal para la preselección.”*
- Asimismo, señala TESAU que *“resulta muy difícil aplicar lo dispuesto en la Circular sin la previa existencia de un **Código de Conducta** que delimite las actuaciones que deben seguir las entidades de verificación”*.
- Por su parte, TESAU manifiesta que en la Circular 1/2004 debería concretarse cuál es el régimen que ampara a los abonados ante una eventual reclamación contra las entidades de verificación, esto es, *“debería concretarse el régimen de defensa de los consumidores”*.
- Por último, TESAU indica que al intervenir en los procesos de preselección para acreditar el consentimiento verbal, la entidad verificadora dispone de datos de carácter personal que deben estar especialmente protegidos. Según TESAU, *“esa CMT debería realizar una consulta a la Agencia de Protección de Datos al objeto de conocer y declarar las responsabilidades de las entidades de verificación sobre el uso de esos datos, señalando plazos y otras garantías y precauciones conexas asociadas al mantenimiento de la información capturada en el proceso.”*

TESAU finaliza su escrito solicitando que por esta Comisión se proceda a resolver la consulta planteada sobre la Circular 1/2004.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Posteriormente, con fecha 23 de julio de 2004, ha tenido entrada en el Registro de esta Comisión, nuevo escrito de TESAU en el que reitera las alegaciones relativas a la necesidad de que exista un organismo independiente que controle el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Circular 1/2004 por parte de las entidades verificadoras.

Finalmente, con fecha 29 de julio de 2004, se ha recibido un nuevo escrito de TESAU en el que expone una serie de consideraciones relativas a la comparativa internacional que se incluyó como anexo en el Informe de la Circular 1/2004.

Concretamente, TESAU señala que *“ha analizado la información de dicha tabla comparativa remitida por la CMT, a partir de la información aportada por la consultora Cullen internacional (que acompaña como anexo a su escrito). Asimismo, TESAU realiza una serie de alegaciones concretas relativas a la situación de la implantación de procedimientos de consentimiento verbal en Noruega, Holanda, Irlanda, Bélgica o Luxemburgo.*

De la información anterior, TESAU concluye que *“en la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno no existe un procedimiento de consentimiento verbal en materia de preasignación y que en los países en los que se ha implantado dicho procedimiento no deja de ser un trámite de agilización del proceso de preselección recomendando las entidades reguladoras la firma del contrato.”*

En opinión de TESAU, la anterior afirmación viene a constatar *“la necesidad de regular la actuación de las entidades verificadoras, especificando quién controla y responde de su actuación y del cumplimiento de los requisitos exigidos por la Circular”.*

TESAU finaliza su escrito solicitando que las manifestaciones anteriores sean tenidas en consideración por esta Comisión *“en la elaboración de la resolución de la consulta planteada por Telefónica de España en relación con la aplicación de la Circular 1/2004”.*

El presente Acuerdo tiene por objeto dar contestación a la consulta planteada por TESAU en relación con las siguientes cuestiones:

- (i) Determinación del organismo competente para controlar a las entidades de verificación.
- (ii) Creación de un Registro Público de entidades de verificación.
- (iii) Supervisión de las relaciones contractuales entre operadores y entidades de verificación.
- (iv) Existencia de un Código de Conducta que delimite las actuaciones a seguir por las entidades de verificación.
- (v) Establecimiento de un mecanismo de resolución de las reclamaciones de los abonados contra las entidades de verificación.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

- (vi) Sobre la necesidad de consultar a la Agencia Española de Protección de Datos sobre la responsabilidad de las entidades de verificación por el uso de datos de carácter personal.
- (vii) Sobre la comparativa internacional incluida en el Informe de la Circular 1/2004.

II.- HABILITACIÓN COMPETENCIAL.

El artículo 48.3 m) de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones (en adelante, LGTel) establece que, en materia de telecomunicaciones, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, ejercerá *“Cualesquiera otras (funciones) que legal o reglamentariamente se le atribuyan o que le encomiende el Gobierno o el Ministerio de Ciencia y Tecnología”*.

Por su parte, el Reglamento de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, aprobado por el Real Decreto 1994/1996, de 6 de septiembre, atribuye a esta Comisión, en el artículo 29.2 a) (*“Otras funciones”*), la competencia para *“resolver las consultas que puedan formularle los operadores de redes y servicios de telecomunicación y las asociaciones de consumidores y usuarios de estos servicios”*.

Con carácter general, habrá de entenderse que las consultas que regula el artículo transcrito podrán versar, principalmente, sobre los siguientes ámbitos:

- Las normas que han de ser aplicadas por esta Comisión;
- Los actos y disposiciones dictados por la propia Comisión;
- Las situaciones y relaciones jurídicas sobre las cuales ha de ejercer sus competencias esta Comisión.

Dado que la consulta planteada por TESAÚ se refiere a diversos aspectos interpretativos relativos a la Circular 1/2004, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones resulta competente para resolver la consulta planteada.

III.- CONSIDERACIONES GENERALES.

Con carácter previo, cabe señalar que el análisis de las cuestiones objeto de consulta se hacen en el marco de la vigente Circular 1/2004. Por tanto, las conclusiones a las que ahora se lleguen únicamente resultan aplicables a aquellos procedimientos en los que el operador beneficiario de la preselección inicie los trámites ante el operador afectado utilizando la vía que establece esta Circular (consentimiento del abonado verbal con verificación por tercero), y no otra (consentimiento escrito del abonado).



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

En la Exposición de Motivos de esta Circular se pone de relieve la baja tasa de penetración de la preselección en España y la necesidad de adoptar determinadas medidas tendentes a lograr su implantación efectiva. En dicho contexto, mediante esta Circular, la Comisión incorpora a la tramitación de las solicitudes de preselección entre los operadores afectados (acceso y beneficiario) aquéllas que tuvieran como origen peticiones de abonados realizadas mediante contratación telefónica. De esta forma, tal y como señala la propia Exposición de Motivos, se extiende a un tipo de contratación que era ya habitual en el sector de las telecomunicaciones al ámbito de la preselección, incorporando una mayor flexibilidad en los trámites y favoreciendo con ello el desarrollo de las actividades de estos operadores y el fomento de la competencia.

Así, por una parte, la Circular 1/2004 implementa la posibilidad de que un operador solicite a otro la tramitación de cambios de preselección a partir de la manifestación del consentimiento verbal del abonado debidamente verificado por un tercero independiente. Esta posibilidad se constituye como una opción que tiene el operador solicitante complementaria de la tramitación de solicitudes con origen en el consentimiento escrito del abonado¹.

Además, en esta Circular, a esta tramitación –surgida a partir de un consentimiento verbal del abonado- se trasladan los requisitos de identidad recogidos en las anteriores Circulares para la tramitaciones de solicitudes previo consentimiento escrito del abonado y, también, se añade la presencia de un tercero independiente que verifique de forma objetiva la existencia de tal consentimiento en las condiciones requeridas.

En concreto, se ha introducido en los Procedimientos Administrativos de Preselección el consentimiento previo expreso verbal del abonado otorgado mediante un sistema de verificación por tercero desarrollado a tales efectos, garantizando la transparencia y seguridad jurídica en la tramitación de preselección por parte de los abonados y en el intercambio de información entre los operadores afectados.

IV.- CONTESTACIÓN A LA CONSULTA PLANTEADA A LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES POR TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.

IV. 1) Sobre el organismo competente para controlar el cumplimiento de la Circular 1/2004 por parte de las entidades de verificación.

¹ Recogida en la Circular 1/2001, de 21 de junio, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, sobre la implantación de la preselección de operador por los operadores de acceso obligados a proveerla en el mercado de redes públicas de telecomunicaciones.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

La Circular 1/2004 tiene por objeto regular la actuación de los operadores de telecomunicaciones respecto de la preselección de operador, introduciendo ciertas previsiones relativas a la posibilidad de que los operadores puedan iniciar la tramitación de sus solicitudes de cambio de preselección frente a otros operadores, siempre y cuando concurra el previo consentimiento verbal del abonado y se cumplan determinadas condiciones que se contemplan en la Circular.

En efecto, ateniéndose a la habilitación que le otorga la LGTel, esta Comisión al dictar la Circular 1/2004, ha tenido como objetivo regular únicamente las relaciones entre los operadores sin incidir en el ámbito de consumidores u otros terceros.

Una vez aclarado lo anterior, ha de señalarse que el apartado Segundo de la Circular 1/2004 atribuye al operador solicitante de la preselección la responsabilidad directa frente a la Administración competente del cumplimiento de las reglas y procedimientos establecidos en la citada Circular:

“Segundo. Ámbito de aplicación y responsabilidad administrativa del operador solicitante de la tramitación de preselección. (...)”

El operador solicitante de la tramitación de la habilitación, modificación o inhabilitación de la preselección es responsable directo frente a la Administración pública competente de la existencia de válido consentimiento previo del correspondiente abonado, estando obligado a seguir en todo momento las reglas y procedimientos establecidos en la presente Circular (...)”

Por su parte, el apartado Tercero de la Circular, bajo la rúbrica “*Verificación por tercero*” establece que para que el operador solicitante de la preselección pueda iniciar la tramitación de una solicitud con consentimiento verbal del abonado, deberá acreditar la existencia de dicho consentimiento verbal a través de una entidad de verificación, la cual deberá cumplir con una serie de requisitos.

De este modo, el operador solicitante de la preselección se configura como el responsable directo de la existencia y validez del consentimiento verbal a efectos de la tramitación de las solicitudes de preselección. Si bien según lo dispuesto en la Circular, algunos de los requisitos que determinan la validez o no del consentimiento verbal deben ser respetados por la entidad verificadora y otros por el operador beneficiario de la preselección, lo cierto es que, en todo caso, la responsabilidad por su incumplimiento se atribuye al operador.

Asimismo, el apartado Cuarto de la Circular 1/2004, señala que para que el operador solicitante pueda iniciar la tramitación de una solicitud con consentimiento verbal, será necesario el cumplimiento de determinados



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

requisitos, de los cuales, al igual que en el caso de los apartados anteriores, será responsable dicho operador.

A tenor de lo anterior, se puede concluir que en la Circular 1/2004 el operador solicitante de la preselección se configura como el responsable directo de su cumplimiento ante la Administración competente.

Pues bien, como ya se indicó en el Informe de la Circular, el operador solicitante de la preselección, en su condición de responsable, deberá responder ante la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones del posible incumplimiento de la Circular 1/2004 en la misma medida que lo hace respecto al resto de Circulares de esta Comisión.

Así, ha de recordarse que según lo dispuesto en el artículo 53 de la LGTel, el incumplimiento de las Circulares de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones está tipificado como infracción muy grave de la normativa reguladora de telecomunicaciones.

Por lo que se refiere a *“las actividades de control sobre las entidades de verificación”*, a las que alude TESAU en su escrito de consulta, ha de indicarse que si bien es cierto que en la Circular 1/2004 no se ha establecido ningún mecanismo de control previo de las citadas entidades de verificación, sin embargo, la concurrencia de conductas anticompetitivas y su detección puede llevarse a cabo a través de diferentes herramientas y las mismas pueden ser perseguidas, igualmente, por medios diversos. En efecto, de conformidad con las reglas del procedimiento administrativo, esta Comisión puede actuar de oficio iniciando el correspondiente procedimiento por propia iniciativa, como consecuencia de una denuncia, etc.

En todo caso, ha de reiterarse que el incumplimiento de las previsiones de la Circular 1/2004 es responsabilidad del operador solicitante de la preselección, el cual está obligado a seguir en todo momento, las reglas y procedimientos en ella establecidos, tal y como señala el apartado Segundo. Por ello, ha de concluirse que la propia Circular 1/2004 determina quién es el organismo competente y el régimen de responsabilidades al que alude TESAU en su consulta.

V.2) Necesidad de crear un Registro Público de entidades verificadoras.

En cuanto a la creación de un Registro Público de entidades verificadoras en el *“ésta se identifiquen con los datos correspondientes acreditativos de su actividad”*, al que se refiere TESAU en su consulta, ha de señalarse que la LGTel, al regular la selección de operador, no contiene previsión alguna acerca de la creación de este tipo de registro, a diferencia de lo que sucede en el caso de otros registros



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

públicos, en los que expresamente la citada Ley –al crear el registro en cuestión- atribuye su llevanza a esta Comisión. Tal es el caso del Registro de operadores regulado en el artículo 7 de la LGTel o del Registro de operadores de servicios de difusión de radio y televisión por cable que se regula en la Disposición adicional décima del mismo texto legal.

Pues bien, esta falta de habilitación legal para la creación de un registro de entidades verificadoras unido al hecho ya señalado de que el operador solicitante de la preselección (y no la entidad verificadora) es el responsable del cumplimiento de la Circular 1/2004, determina la imposibilidad de crear el Registro al que alude TESAU.

No obstante, la falta de un Registro Público no impide a TESAU tener conocimiento de la información relativa a los verificadores. Por el contrario, en el Apartado octavo de la Circular (*“Información periódica a remitir a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones”*) se impone al operador beneficiario de la preselección –en su condición de responsable del cumplimiento de la Circular- la obligación de remitir información relativa a la entidad verificadora, tanto a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones como al operador de acceso.

A mayor abundamiento, señalar que en todo caso, al amparo del artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, TESAU podrá solicitar el acceso a la información que sobre la Circular 1/2004 obre en los archivos de esta Comisión, con excepción de los documentos protegidos por el secreto comercial o industrial.

V.3) Sobre la supervisión de las relaciones contractuales entre operadores y entidades de verificación.

Como se ha señalado anteriormente, el objeto de la Circular 1/2004 es implementar la tramitación de solicitudes de preselección de operador, a partir de la manifestación de un consentimiento verbal por parte del abonado. De hecho, como se afirma en la Exposición de motivos, la Circular 1/2004 *“pretende únicamente la regulación entre operadores respecto de la tramitación de solicitudes de preselección del operador”*, pero sin incidir en el ámbito de otros terceros.

Por esta razón, en la Circular 1/2004 no se han regulado los requisitos que los operadores exigirán a las entidades de verificación ni la relación jurídica existente entre ambas partes plasmada en el correspondiente contrato. Es más, como ya se indicó en el Informe de la Circular, no se consideró razonable establecer en la Circular un mecanismo de control *ex ante* de las relaciones jurídicas existentes entre operadores y verificadores.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

En todo caso, la actuación del operador solicitante de la preselección en el ámbito de la Circular, en su condición de responsable directo de su cumplimiento, será supervisada por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

V.4) Sobre el Código de Conducta que delimite las actuaciones a seguir por las entidades de verificación.

En relación con el Código de Conducta, ha de reiterarse que el objeto de la Circular 1/2004 es dictar una serie de instrucciones a los operadores que pretendan tramitar solicitudes de preselección a partir de la manifestación de un consentimiento verbal por parte del abonado.

Pues bien, en los Apartados tercero (*“Verificación por tercero”*) y cuarto (*“Tramitación de solicitudes de preselección con consentimiento verbal”*) de la Circular se delimita la actuación de las entidades de verificación mediante el establecimiento de una serie de requisitos que deben cumplir las citadas entidades; requisitos que podrían considerarse como un código de conducta al que alude TESAÚ, en la medida en que en dichos apartados se establecen las conductas prohibidas y permitidas para las entidades de verificación, a los efectos de que el operador beneficiario pueda tramitar solicitudes de preselección ante el operador de acceso.

V.5) Sobre el establecimiento de un mecanismo de resolución de las reclamaciones de los abonados contra las entidades de verificación.

La facilidad de preasignación o preselección de operador es una modalidad de acceso al servicio telefónico que permite a los usuarios fijar por adelantado el operador que desean que curse sus llamadas sin necesidad de anteponer el código de selección de operador seleccionado en cada llamada.

La Circular 1/2004 ha venido a incorporar a la tramitación de solicitudes de preselección la contratación telefónica por parte de los abonados mediante el consentimiento verbal de éstos; consentimiento que deberá ser verificado por un tercero independiente.

Tal y como señala la Exposición de Motivos de la Circular, la introducción de la figura del verificador independiente tiene por objeto proporcionar *“seguridad jurídica en la tramitación de las solicitudes de preselección de operador”*.

Ha de indicarse que la entidad verificadora únicamente presta servicios al operador solicitante de la preselección, pero en ningún caso al abonado. De hecho, cuando la entidad de verificación se pone en contacto con el abonado – bien por propia iniciativa del abonado, bien a través del agente de ventas del



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

operador solicitante- ha de identificar al operador solicitante para el que está verificando la prestación del consentimiento.

Así se establece en el Anexo I (*"Cuestionario de verificación"*) de la Circular 1/2004, al señalar en el punto 4 de los apartados relativos a *"Habilitación de preselección"*, *"Modificación de la modalidad en preselección"* y *"Inhabilitación de la preselección"*, que en la tramitación de la preselección, la entidad verificadora deberá solicitar al abonado la *"prestación del consentimiento a que **el operador** realice las gestiones necesarias para (...)"*.

Queda claro, por tanto, que el servicio en que consiste la preselección lo va a prestar el operador solicitante de que se trate y que el consentimiento para la prestación de este servicio se produce a favor de dicho operador. Asimismo, este operador será el que gestione, una vez obtenido ese consentimiento del abonado, la solicitud de preselección ante el operador de acceso. De este modo, todas las reclamaciones que puedan plantearse con motivo de la prestación de la preselección deberán solventarse frente al operador, que es quien responde de la misma.

En atención a lo anterior, todas las reclamaciones que se produzcan deberán solventarse siguiendo el procedimiento para la resolución de conflictos entre los usuarios y los operadores prestadores del servicio telefónico disponible al público establecido en el Reglamento del Servicio Universal².

Concretamente, el artículo 61 del citado Reglamento establece el derecho del abonado a acudir bien a las Juntas Arbitrales de Consumo, bien a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para resolver los conflictos suscitados con el operador en relación con la prestación del servicio telefónico disponible al público:

Artículo 61. Procedimientos de resolución de conflictos.

1. Las reclamaciones de los abonados del servicio telefónico disponible al público y las de los usuarios finales de los servicios de líneas susceptibles de arrendamiento sobre su funcionamiento, su precio, su facturación, la responsabilidad por daños o cualquier otra cuestión que pudiera plantearse en relación con la prestación del servicio, deberán dirigirse a cualquiera de las oficinas comerciales del operador, en el plazo de un mes desde el momento en que se tenga conocimiento del hecho que las motive. Formulada

² Reglamento por el que se desarrolla el Título III de la Ley General de Telecomunicaciones en lo relativo al servicio universal de telecomunicaciones, a las demás obligaciones de servicio público y a las obligaciones de carácter público en la prestación de los servicios y en la explotación de las redes de telecomunicaciones, aprobado por el Real Decreto 1736/1998, de 31 de julio (en adelante, Reglamento del Servicio Universal), en vigor, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición transitoria primera, apartado quinto de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

la reclamación, si el abonado no hubiera obtenido respuesta satisfactoria del operador en el plazo de un mes, podrá acudir a las vías indicadas en los apartados siguientes.

2. Los abonados podrán dirigir su reclamación a las Juntas Arbitrales de Consumo, en los términos establecidos en la normativa reguladora de las mismas.

3. Para el supuesto de que el operador o el abonado no se sometan a las Juntas Arbitrales, éste podrá dirigirse, en el plazo de un mes desde la respuesta del operador o la finalización del plazo para responder, a la Secretaría General de Comunicaciones que, una vez realizados los trámites oportunos, dictará resolución sobre la cuestión planteada. La resolución que ésta dicte agotará la vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso contencioso-administrativo (...)."

No obstante, lo señalado respecto al mecanismo de resolución de conflictos indicado, se entiende sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir quien realizara actuaciones consistentes en suplantaciones de personalidad.

V.6) Sobre la necesidad de consultar a la Agencia Española de Protección de Datos acerca de la responsabilidad de las entidades de verificación por el uso de los datos de carácter personal.

En relación con la solicitud de informe a la Agencia Española de Protección de Datos, ha de reiterarse que la Circular 1/2004 tiene por objeto únicamente regular un procedimiento de preselección entre operadores mediante el consentimiento verbal del abonado.

Por ello, tal y como se establece en la propia Circular, las cuestiones sobre el cumplimiento por parte de los operadores y de las entidades de verificación de las obligaciones en materia de datos personales así como el régimen de responsabilidades en caso de incumplimiento se encuentran sujetos a la normativa específica sobre protección de datos, en especial, a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Concretamente, la Exposición de Motivos señala que la Circular *"queda al margen (...) de la normativa sobre protección de datos de carácter personal de obligado cumplimiento para los operadores y entidades verificadoras"*.

Asimismo, el Apartado tercero al establecer los requisitos que deben cumplir las entidades verificadoras hace referencia expresa en la letra d) al cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos.

En relación con los operadores, la LGTel en su artículo 34 prevé que *"los operadores que exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas o que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público deberán garantizar, en el ejercicio de su actividad, la protección de los datos de carácter personal conforme a la legislación vigente."*



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

En cualquier caso, ha de indicarse que si la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en el ejercicio de sus competencias, tuviera indicios de que por parte de un operador o de una entidad de verificación se estuviera incumpliendo la normativa sobre protección de datos de carácter personal, lo pondría en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos, en cuanto órgano competente, a los efectos oportunos.

V. 7) Sobre la comparativa internacional incluida en el Informe sobre la Circular 1/2004.

Con carácter previo al análisis de la comparativa internacional incluida en el Informe sobre la Circular 1/2004, cabe señalar que dicha información se incluyó simplemente a efectos de completar el citado Informe y con el fin de mostrar el grado de implantación del mecanismo de consentimiento verbal en la tramitación de la preselección en países de nuestro entorno. Ahora bien, en ningún caso las conclusiones alcanzadas en relación con los datos comparativos entre países fue determinante para la adopción de la Circular 1/2004.

Una vez señalado lo anterior, en cuanto a las cuestiones señaladas por TESAU en su escrito de consulta, ha de indicarse que los datos aportados por esta operadora no se corresponden con la realidad al no estar debidamente actualizados, tal y como han manifestado las diferentes Autoridades de Reglamentación consultadas por esta Comisión.

El presente certificado se expide al amparo de lo previsto en el artículo 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el Artículo 23.2 de la Orden de 9 de abril de 1997, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, con anterioridad a la aprobación del Acta de la sesión correspondiente.

EL SECRETARIO

Vº Bº

EL PRESIDENTE

Alfonso Ramos de Molins Sáinz de Baranda



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Carlos Bustelo García del Real